

Responsabilidad Funcional de los fiscales en el delito de omisión a la asistencia familiar

Responsibility of prosecutors in the crime of failure to provide family assistance

Solanch Bright Palomino Rodríguez

RESUMEN

Objetivos: El objetivo del estudio fue examinar cómo el incumplimiento de la ejecución de sentencias en los delitos de omisión a la asistencia familiar refleja una falla en la responsabilidad funcional de los fiscales. **Material y Métodos:** El estudio fue de tipo básico, con un enfoque cualitativo y fenomenológico. Se trabajó con una muestra de ocho especialistas en materia penal, quienes fueron entrevistados sobre su experiencia y percepción acerca de la ejecución de las sentencias en casos de omisión a la asistencia familiar. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada. **Resultados:** Los resultados obtenidos revelan que una de las principales dificultades es la carga procesal de los fiscales, lo que impide que puedan realizar un seguimiento adecuado a cada caso con sentencia condenatoria. Esta falta de seguimiento genera una violación del deber de los fiscales de garantizar la protección de los derechos de los alimentistas, afectando así la efectividad de las sentencias y perjudicando a los niños y adolescentes beneficiarios de las pensiones alimenticias. **Conclusiones:** Se concluye que el Congreso de la República del Perú debe modificar las políticas de responsabilidad funcional de los fiscales, para que puedan cumplir con su deber de manera más efectiva, incluso ante una carga procesal elevada. Además, se recomienda que el Ministerio Público fortalezca su capacidad para investigar y procesar los delitos por omisión a la asistencia familiar, así como la creación de mecanismos más accesibles para que los alimentistas puedan denunciar el incumplimiento de las sentencias.

Palabras clave: Responsabilidad funcional, interés superior del niño y del adolescente, asistencia familiar, devengados.

ABSTRACT

Objectives: The objective of the study was to examine how the failure to execute sentences in cases of omission to provide family support reflects a breakdown in the functional responsibility of prosecutors. **Materials and Methods:** The study was basic, with a qualitative and phenomenological approach. A sample of eight specialists in criminal law was interviewed regarding their experiences and perceptions about the execution of sentences in cases of omission to provide family support. The data collection technique used was semi-structured interviews. **Results:** The results revealed that one of the main difficulties is the prosecutors' workload, which prevents them from adequately following up on each case with a conviction. This lack of follow-up leads to a violation of the prosecutors' duty to ensure the protection of the alimentary rights of those entitled to support, thus affecting the effectiveness of the sentences and harming the children and adolescents who are the beneficiaries of alimony. **Conclusions:** It is concluded that the Congress of the Republic of Peru should amend the policies on the functional responsibility of prosecutors to enable them to fulfill their duties more effectively, even in the face of a heavy workload. Additionally, it is recommended that the Public Ministry strengthen its capacity to investigate and prosecute crimes of omission to provide family support, as well as create more accessible mechanisms for those entitled to alimony to report the non-compliance with the sentences.

Key words: functional responsibility, best interests of the child and adolescent, family support, accrued amounts.

Recibido 19/10/2023 Aprobado 20/11/2023

Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



¹Estudiante de la Facultad de Derecho y Humanidades. Escuela profesional de derecho. Universidad Cesar Vallejo Autor correspondiente: spalominoro@ucvvirtual.edu.pe y ORCID 000-0001-9342-1514

INTRODUCCIÓN

La familia es la unidad básica de la sociedad y está protegida por el Estado. Para mantener una familia es necesario contar con una buena situación económica que permita brindar una calidad de vida adecuada a los hijos. Sin embargo, existe una problemática que afecta a muchas familias: el incumplimiento alimentario (Bordali, 2019). En Chile, una de las faltas más graves que enfrenta la Corte Suprema es la pensión de alimentos. El 84 % de las pensiones alimenticias establecidas por los tribunales de familia son incumplidas. Además, en 9 de cada 10 casos, las demandantes son mujeres, y un 65 % de los afectados no reciben la pensión alimenticia, la cual corresponde a familias de escasos recursos.

El incumplimiento alimentario es un problema social que tiene un impacto negativo en la vida de los niños y niñas. Los menores que no reciben pensión alimenticia pueden sufrir malnutrición, falta de acceso a la salud, educación insuficiente y otros problemas (Baldino, 2022). El Estado debe tomar medidas para prevenir y sancionar el incumplimiento alimentario, además de brindar apoyo a las familias que no reciben pensión alimenticia, para que puedan ofrecer una buena calidad de vida a sus hijos.

El Perú no es ajeno a esta problemática, ya que uno de los procesos penales más frecuentes está relacionado con la falta de apoyo familiar. En 2017, se registraron 9,850 casos de negativa a alimentar a los hijos, seguidos por violencia doméstica, un delito recurrente con un total de 2,549 casos, y violencia sexual, con 1,776 casos, lo que indica que son problemas frecuentes en nuestra nación (Fernández y Silva, 2021, p. 109). En consecuencia, el delito de omisión a la asistencia familiar se refiere a diversas pensiones alimenticias no pagadas, las cuales también fueron resueltas en procesos familiares previos. Además, este delito está incluido en el Título III del Código Penal (1994), que abarca los actos que atacan contra la familia, y establece una pena que no supera los 3 años, salvo que el agente simule vivir con otra persona o renuncie maliciosamente a su empleo.

De este modo, el incumplimiento de la obligación alimentaria es el único delito que implica pena de cárcel por deudas, lo cual es crucial para que las familias puedan solventar los gastos económicos que enfrentan, todo en beneficio del interés superior del niño y adolescente. En este sentido, debería haberse resuelto de manera inmediata, a través de un proceso célere, conforme lo establece el inciso 4 del Art. 446 del Código Procesal Penal (CPP), el cual fue modificado para permitir la incorporación de los casos en los distintos distritos judiciales, facilitando el inicio de procesos que protejan a los miembros de la familia con solo los documentos legalizados en el proceso alimenticio civil. Sin embargo, existen deficiencias por parte de los jueces al momento de ejecutar las sentencias, lo que genera una responsabilidad funcional por su parte.

En algunos casos, el incumplimiento de funciones por parte de los juzgados puede deberse a una falta de recursos o personal en los tribunales encargados de la

asistencia familiar. Esto puede provocar retrasos en la tramitación de los casos, lo que, a su vez, genera mayor angustia y dificultades económicas para la familia afectada. Además, el incumplimiento de estas funciones puede tener consecuencias a largo plazo para los hijos, cónyuges o parejas que dependen del apoyo financiero

Respecto a las bases teóricas que respaldan la presente investigación, se abordan las categorías y subcategorías correspondientes. En primer lugar, se encuentra la categoría de responsabilidad funcional de los fiscales. Para el análisis de esta responsabilidad, se toma como base el trabajo de Nakazaki (2018), quien parte de la idea primordial de determinar si existe culpa grave (conocida como "inexcusable") o dolo. Según esta perspectiva, la existencia de culpa por sí sola no es suficiente para generar responsabilidad sobre el imputado. De esta manera, se puede entender que la responsabilidad del fiscal tiene un carácter subjetivo, basado en un factor de atribución que se atenúa según las circunstancias del caso.

Ahora bien, la responsabilidad funcional de los fiscales, según Ávalos (2020), señala que, según lo dispuesto en el artículo 509, en el ejercicio de las funciones judiciales, los fiscales que perjudiquen a las partes o a terceros, y que cometan errores fraudulentos o delictivos, son inexcusables y estarán sujetos a las sanciones administrativas o penales correspondientes. Si el fiscal ha influido en el proceso con fraude o dolo, o si ha denegado justicia por omisión, el acto se considera doloso, y aún más grave si dicho acto ocurre bajo la influencia de un tercero.

Segunda categoría: Omisión a la asistencia familiar. En cuanto al desvío de la manutención familiar, la versión reglamentaria del artículo 149 del Código Penal, establecida por el Congreso de la República (2022), permite que las figuras penales de omisión de manutención familiar supriman y sancionen a todos los sujetos que tengan la obligación de proporcionar alimentos y se nieguen a cumplirla, a pesar de contar con decretos civiles que los obliguen a hacerlo, incluso cuando exista la posibilidad de cumplir con dicha obligación.

Según Mego (2019), la falta de suministrar alimentos no solo implica una violación de los deberes familiares, sino que también genera riesgos que afectan derechos fundamentales de quienes deben recibirlos, como la vida, el cuerpo y la salud. Por esta razón, el derecho punitivo desempeña un papel crucial en la prevención de consecuencias perjudiciales para los beneficiarios, y debe intervenir mediante la aplicación de sanciones, incluso antes de que se produzcan daños mayores.

De acuerdo con la publicación de la Corte Suprema de Justicia de la República (2018), en el Acuerdo Plenario Especial No. 02-2016/CIJ-116 del 1 de junio de 2016, se establece que la falta de apoyo familiar es un delito penal y constituye una violación a un deber civil. Aquellos que, teniendo familia, por sus acciones abusivas ponen en peligro la subsistencia y otros aspectos de la vida de sus

familiares, limitando la capacidad de cubrir las necesidades de los niños, cometen una infracción. Por lo tanto, la protección se basa en las obligaciones de los miembros de la familia de proporcionar seguridad y apoyo, y la violación de estas obligaciones da lugar a negligencia criminal. El incumplimiento del deber de apoyo, establecido en el artículo 472 del Código Civil, tipifica la negligencia criminal por el no cumplimiento de la asistencia familiar.

Los enfoques conceptuales del presente estudio son: incumplimiento de funciones, que corresponde a la omisión de las funciones asignadas a los fiscales en relación con sus labores; riesgo alimentario, que se refleja en el inadecuado seguimiento de la ejecución de sentencias por parte de los fiscales en los delitos que vulneran el derecho de los niños y adolescentes a recibir apoyo familiar; y pensión de alimentos, que se refiere a la cantidad económica estipulada en la sentencia judicial, que debe ser proporcionada por la persona obligada para cubrir las necesidades alimenticias.

Este estudio se justifica por las deficiencias observadas en las labores funcionales realizadas por los fiscales en el delito de omisión a la asistencia familiar, ya que no garantizan que las familias reciban el apoyo financiero necesario para su sustento.

Por tanto, el objetivo general es: Analizar de qué manera se refleja la responsabilidad funcional de los fiscales ante el incumplimiento de la ejecución de sentencia en los delitos por omisión a la asistencia familiar en Huancayo, 2022. Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Analizar de qué manera se refleja la responsabilidad funcional de los fiscales y cómo atenta contra el interés superior del niño y del adolescente en los delitos por omisión a la asistencia familiar en Huancayo, 2022.
2. Analizar si el incumplimiento de los devengados atenta contra el interés superior del niño y del adolescente y genera responsabilidad funcional de los fiscales en la omisión a la asistencia familiar en Huancayo, 2022.

De acuerdo con otros estudios, como el de Silva y Quispe (2021), se concluye que las funciones desempeñadas por los fiscales son deficientes, ya que no realizan indagaciones adecuadas. Además, en el estudio de Castillo (2019) se evidenció que el delito de omisión a la asistencia familiar no siempre es resuelto de manera efectiva debido a la sobrecarga laboral del personal fiscal, el cual, además, carece de competencia para cumplir con los plazos establecidos, lo que perjudica a los beneficiarios.

METODOLOGÍA

En cuanto al escenario del estudio, se consideró que la investigación se centraría en los especialistas y abogados involucrados en el proceso, y el criterio para su inclusión fue que pertenecieran al Distrito Judicial de Huancayo. Para los participantes del estudio propuesto,

se seleccionaron ocho personas, entre especialistas y abogados, todos pertenecientes al Distrito Judicial de Huancayo. Este estudio fue de tipo básico, con enfoque cualitativo y diseño teórico fundamentado. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se utilizó la entrevista como estrategia inicial, seleccionada por ser adecuada para la recolección de datos en estudios de enfoque cualitativo. Según Huamanchumo y Rodríguez (2015, p. 252), las entrevistas son una herramienta clave en contextos académicos e investigativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos, previamente coordinados con los entrevistados, quienes contribuyeron durante la reunión y respondieron al objetivo general del estudio, indican que la fiscalía no presenta la revocatoria de sentencias ni realiza el control adecuado sobre la ejecución de las mismas. Esta falta de acción es clave, ya que la fiscalía debería asegurar que las sentencias sean ejecutadas de manera oportuna y con el impulso procesal necesario.

Por otro lado, se destacó que los fiscales enfrentan una elevada carga procesal, lo que, sumado a la presencia de otros casos de mayor prioridad, dificulta el seguimiento adecuado de los casos relacionados con la omisión de la asistencia familiar. Esto contribuye a la ineficacia en el cumplimiento de las sentencias y agrava la situación de los beneficiarios.

En este sentido, el resultado obtenido a partir de la guía de entrevistas, en relación con el objetivo principal del informe de investigación, mostró que la mayoría de los encuestados señalaron que los fiscales no cumplen con su responsabilidad funcional al no hacer efectivas las sentencias en los casos de omisión a la asistencia familiar. Estos casos implican el incumplimiento de las obligaciones alimentarias hacia hijos y adolescentes, siendo considerados delitos contra la familia. Los fiscales no pueden justificarse en la carga procesal para evitar hacer cumplir las penas impuestas por los tribunales, ya que su falta de actuación perjudica a las familias y vulnera los derechos de los niños y adolescentes.

Asimismo, el estudio realizado por Silva y Quispe (2021) corrobora la referida responsabilidad funcional de los fiscales, pero en este caso, se enfoca en el archivamiento de las investigaciones de delitos en San Román-Juliaca. El propósito principal de dicho estudio fue analizar las causas que subyacen a la responsabilidad del fiscal en el archivamiento de las investigaciones. Como conclusión, se señala que las funciones de los fiscales son deficientes, ya que no realizan las indagaciones adecuadas.

Asimismo, los resultados demostraron que la mayoría de los entrevistados coincidieron en que el interés superior de los niños y adolescentes en el delito de omisión de auxilio a la familia se ve seriamente afectado por las irresponsabilidades funcionales del fiscal. Esto se debe a que la fiscalía ha mostrado una falta de coordinación en

su enfoque y juicio individualizado para el cumplimiento de la ley. Además, mencionaron que el interés del menor no ha sido adecuadamente priorizado en cada uno de los procesos judiciales. Sin embargo, los resultados de la entrevista también revelaron que la responsabilidad recae únicamente en el fiscal, quien es responsable de todas las consecuencias jurídicas, lo que afecta negativamente la calidad de vida del niño y adolescente.

Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo específico, la mayoría de los participantes afirmaron que el incumplimiento del pago de los devengados vulnera el interés superior del niño y del adolescente. Por lo tanto, los fiscales deben realizar un mejor seguimiento de los procesos en ejecución y encontrar soluciones a los problemas que han impedido la recuperación de los devengados. Estos hallazgos coinciden con el informe de investigación realizado por Moreno (2018), quien demostró que el delito de no cumplir con los alimentos perjudica al niño y al adolescente.

CONCLUSIONES

Se constató que las políticas de responsabilidad funcional de los fiscales fueron quebrantadas ante el incumplimiento de la ejecución de sentencia en los delitos por omisión a la asistencia familiar. Si bien los fiscales han argumentado que la sobrecarga procesal dificulta el cumplimiento de sus responsabilidades, esto no los exime de su deber de hacer cumplir las sentencias en favor del alimentista. En consecuencia, la responsabilidad funcional de los fiscales es perjudicial cuando no se ejecuta correctamente la sentencia en casos de omisión a la asistencia familiar, lo cual impacta negativamente en el bienestar de los menores involucrados. Es fundamental que los fiscales garanticen el cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales, asegurando que los derechos de los niños y adolescentes sean protegidos.

Se constató que la responsabilidad funcional de los fiscales afectó el interés superior del niño y del adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar, evidenciando deficiencias en la toma de decisiones sobre cómo abordar cada caso y asegurar el cumplimiento de la ley. Esto generó efectos negativos en el interés superior de los menores, reflejándose en situaciones en las que no se priorizaron adecuadamente sus intereses durante el proceso judicial. Sin embargo, no se pudo atribuir exclusivamente a los fiscales todas las consecuencias jurídicas que pudieron afectar al alimentista en estos casos, ya que existían otros factores externos y condiciones estructurales que impactaron en la labor de los fiscales, tales como la considerable carga procesal, la falta de personal y los ambientes inadecuados, lo que dificultó la realización de investigaciones exhaustivas y la atención adecuada a cada caso particular.

Se corroboró que el incumplimiento de los devengados atenta contra el interés superior del niño y del adolescente, y genera responsabilidad funcional de los fiscales en los casos de omisión a la asistencia familiar.

Esto se debe a que en varios casos los fiscales no realizaron el seguimiento adecuado de los procesos en ejecución, lo que afectó negativamente la recuperación de los devengados y generó perjuicios para los niños y adolescentes beneficiarios de las pensiones. Este incumplimiento también impactó negativamente en el bienestar emocional, físico y educativo de los menores, contraviniendo el principio del interés superior del niño y del adolescente, consagrado tanto en la legislación nacional como en la normativa internacional de derechos humanos.

REFERENCIAS

- Ávalos, C. R. (2020). Estimación de la prevalencia de la responsabilidad civil de los jueces en el Poder Judicial Peruano – 2018. <https://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/1006>
- Baldino, N. y Romero, D. G. (2022). El delito de omisión de asistencia familiar: análisis del tipo objetivo. <https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/82>
- Bordalí, A. (2019). Independencia y responsabilidad de los jueces. <https://www.revistaderechovaldivia.cl/index.php/revde/article/view/791>
- Congreso de la República. (2022). Omisión de asistencia familiar. Diálogo de la jurisprudencia N° 125. Recuperado: <https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Biblioteca/Biblioteca.nsf/RBOmisionAsistencia?OpenForm&Start=1&Count=150&Expand=1.3&Seq=4>
- Corte Suprema de justicia de la República (2018), expone que en dentro de todo Acuerdo Plenario Especial No. 02-2016/CIJ-116 del 1 de junio de 2016. <https://lpderecho.pe/alcances-del-proceso-inmediato-reformado-acuerdo-plenario-extraordinario-2-2016-cij-116/>
- Fernández, A. T. y Silva, F. R. (2021). Principales razones por las que no se demanda responsabilidad civil de los jueces en el distrito judicial de Cajamarca. <http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2055>
- Huamanchumo, H. y Rodríguez, J. (2015, p. 241). Metodología de la investigación científica en las organizaciones. http://isbn.bnpgob.pe/catalogo.php?mode=busqueda_menu&id_autor=41543
- Mego, M. (2019). La obligación de incoación del proceso inmediato y el principio de celeridad en los procesos por flagrancia delictiva, en el distrito judicial de La Libertad, período 2016-2017. Recuperado: https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/5707/1/REP_Maest.Dere_Michael.Mego_Obligación.Incoación.Proceso.Inmediato.Principio.Celeridad.Procesos.Flagrancia.Delictiva.Distrito.Judicial.La.Libertad.Período.2016-2017.Pdf

Nakazaki, C. (2018). El delito de omisión de asistencia familiar, principales problemas. Gaceta jurídica.

Rodríguez, M., Ugaz, A., Gamero, L., y Schonbohm, H. (2019). Manual de investigación preparatoria del proceso penal común. Conforme a las previsiones del Nuevo Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N°957. Poder Judicial del Perú. <https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/11/Manual-de-la-investigación-preparatoria-del-proceso-común-LP.pdf>

